

Gabriel Valdés S.
Presidente de la Alianza Democrática
Presidente del Partido Demócrata Cristiano

MENSAJE AL PAIS

www.archivopatricioaylwin.cl

En esta hora tan decisiva de nuestra historia es necesario aclarar posiciones y asumir con responsabilidad la realidad política que es la clave del momento que vivimos. Nuestra actitud interior quisiera ser aquella del gran filósofo chileno Jorge Millas que en momentos solemnes se dirigió al país, como él lo dijera "con respeto y sin ira", sí, con respeto y sin ira cualquiera sea la tendencia de quienes nos escuchan.

La Protesta Nacional del martes 27 de marzo, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores y la Alianza Democrática, en su enorme profundidad y extensión, demostró el nivel del agotamiento de la paciencia nacional frente al régimen, y la voluntad de la inmensa mayoría de los chilenos, de producir ahora un cambio político de fondo, pacífico y consensual.

Las protestas del año pasado, originadas en la valiente decisión de los trabajadores del Cobre, fueron manifestaciones progresivas de una tensión social que no encontró otro medio de expresión pacífico para defender los derechos del pueblo y pedir la democracia. En la conciencia del país se consolidó la convicción del fracaso de un régimen que ha ahogado la libertad, ha agravado al extremo los problemas del país tanto nacionales como internacionales y ha olvidado los valores que conforman su ser nacional.

Frente a las protestas, el Gobierno reaccionó usando la fuerza y la represión y concurrió, finalmente, a un diálogo en el que demostró, ante el país entero, la ausencia de voluntad en la búsqueda de acuerdos reales para el retorno democrático.

La protesta no es la causa, es el efecto de una inmensa crisis nacional, generalizada y profunda que ha dejado en evidencia que vivimos una situación límite. El país está polarizado social, cultural y políticamente. El Gobierno se aferra a la fuerza y castiga con violencia por sus ideas, a quienes disienten y exigen sus derechos. ¿Cree acaso que violentando y atropellando a los ciudadanos, como por ejemplo, a los universitarios va a eliminar el derecho de la juventud a tener universidades libres y autónomas?. Es ésta una conducta torpe que ha demostrado su absoluta inutilidad, a lo largo de la historia.

El país ve estupefacto que después de 10 años de Gobierno aumenta el terrorismo de uno y otro signo, tanto de cuerpos armados secretos, como de brigadas terroristas de extrema izquierda. Ambos extremos se asemejan y confunden.

Unos asesinaron a Tucapel Jiménez y golpearon brutalmente a Jorge Lavandero. Estos quedan hasta hoy impunes; otros matan a carabineros, o militares, y no faltan quienes, después de las protestas, maltratan y disparan contra gente humilde especialmente contra los jóvenes de las poblaciones. Sus delitos también se mantienen en la impunidad. Unos pocos viven con comodidad, pero su aparente seguridad empieza progresivamente a debilitarse, porque no ignoran que cuando hay seguridad para unos pocos, no hay seguridad para nadie. Al final, el país recuerda con nostalgia la democracia en que Presidentes y ciudadanos podían vivir en libertad y andar a pie por las calles, sin temor.

Para la inmensa mayoría ciudadana, la vida transcurre entre graves privaciones. Para nadie hay horizontes confiables. Además, el régimen ha abierto una peligrosa brecha entre civiles y militares. Desde el exterior se nos ve como un país aislado y en grave convulsión.

Por todo ello decimos sin retórica que la Nación está en peligro de desintegración.

En esta grave y sostenida situación nacional, la intransigen-

cia del Gobierno obliga a los chilenos a protestar.

Gracias a la protesta, se han obtenido algunos resultados. Se han abierto espacios que han permitido una cierta liberación en la acción política y del derecho de expresión, hoy nuevamente reprimidos. Fue la protesta que doblegó la terca voluntad de seguir manteniendo el equipo económico "hasta el final" como lo expresara el Jefe del Estado. Su tardío alejamiento no pudo impedir la destrucción de la industria, el comercio, la agricultura, la construcción, la minería y en gran medida de la cultura del país, con las consecuencias de desempleo masivo que un tercio de la población está sufriendo y la escandalosa quiebra del sistema financiero.

Pero lo que resulta verdaderamente increíble es que los que siempre aplaudieron la rotativa de Ministros de Hacienda y Economía y la conducción económica de los "Chicago Boys" como "muy positiva" sean los mismos que hoy celebran y piden su término. Esta actitud muestra una irresponsabilidad enorme con Chile y su pueblo.

En los últimos días se ha designado nuevos ministros del sector económico. No pueden ellos esconder, bajo su condición de técnicos, su plena solidaridad con la naturaleza y práctica de un Gobierno represivo.

Con sinceridad deseáramos que su gestión iniciara por lo menos una reactivación económica y se buscara un inicio de solución a la pobreza y el desempleo. Sus primeras declaraciones, tan optimistas como vagas, han creado ilusiones en el sector empresarial porque discrepan con las políticas aplicadas hasta ahora. Siempre todo cambio ministerial crea expectativas. Pero, con la mayor claridad queremos advertir que no habrá un duradero y significativo desarrollo económico si no se ataca la crisis en su integridad, porque en Chile están comprometidos todos los ámbitos de la vida del país, comenzando por la moral en la gestión de tantas actividades públicas y privadas. Es necesario llamar las cosas por su nombre. Nada se obtendrá con designar nuevos ministros en un sector —y ellos debieran ser los primeros en advertirlo— si asistimos a una profunda crisis social, internacional, política, y aún más, de legitimidad y convivencia. No estamos juzgando la capacidad técnica de las personas. Estamos anticipando el hecho de que,

su presencia en el régimen, no hará cambiar la naturaleza de éste y para quienes se ilusionen, vendrá luego la frustración. No hay a este respecto cómo equivocarse.

Por lo tanto, se trata de un conflicto generalizado que tiene dividida profundamente a la Nación. Todos sabemos la extrema rigidez de la situación financiera externa, como consecuencia del sometimiento voluntario del Gobierno a convenios negociados sin autonomía y sin la dignidad que otros países han mostrado. El aislamiento internacional, el masivo endeudamiento interno, el escaso incentivo y expectativas para el ahorro y la inversión, y en general, los daños producidos por diez años de desgobierno económico harán fracasar las mejores intenciones. Los chilenos sabemos que sin cambio político no habrá capacidad negociadora, pues el problema de la deuda externa debe llevarse tarde o temprano a un nivel político en donde el apoyo de los gobiernos democráticos de occidente son esenciales para una verdadera solución. Sin cambio político no se logrará la participación de los trabajadores en un acuerdo que dé paz social y permita convenir un sostenido esfuerzo económico de emergencia.

Frente a este dramático fracaso el General Pinochet pretende seguir obligando a los chilenos a someterse a sus dictados amparados por una Constitución que carece de legitimidad. Desea seguir dirigiendo los destinos del país, hasta el fin de la década o más allá, sobre la base de la fuerza. No le parece demasiado gobernar durante 10 años con estos resultados y pretende seguir 7 ó 14 años más en el poder. Todos sabemos las consecuencias de esta situación. El régimen personalista irá perdiendo el residuo de autoridad que le resta; podrá mantenerse por la fuerza, pero deberá aumentar la represión y la violencia. Fatalmente crecerá el terrorismo, de todos los signos incluso el que "oficiosamente" ha surgido contra los opositores.

Esta es la situación suicida a que nos vemos abocados y que la Alianza Democrática ha denunciado reiteradamente. Si se pretende seguir este camino, no quedará otra alternativa que seguir protestando, cada vez en forma más extensa, para romper la sordera y abrir los ojos de quienes creen haberse enseñoreado del país.

Ante el fenómeno social de la protesta y la rebeldía nacio-

nales, algunos parecieran soñar con la militarización del país. Esa pesadilla es históricamente recurrente. Es la forma de llegar a la paz de los cementerios. Es la paz que ha reinado en Varsovia, donde en algunos momentos de su historia, la fuerza impuso de manera masiva el asesinato, la relegación y el exilio. Nadie duda que, por un tiempo, es posible la paz de los cementerios en Chile. Después de todo, cualquier grupo de hombres armados puede eliminar a cualquier grupo de hombres indefensos. La tragedia reside en que después de una operación de esa naturaleza, el horror de los reprimidos se convierte en el terror de los represores, desapareciendo todo sentido de una Patria común.

Por eso, el sueño de endurecer el régimen, ni siquiera es una amenaza que asuste a los opositores. A lo más, tal intento podría postergar por un tiempo la democratización del país. Pero el conjunto de las fuerzas civiles y militares que apoyasen tan siniestro proyecto represivo cargarían con el peso de la responsabilidad histórica de profundizar una herida muy honda que destrozaría al país y tardaría muchos años en recuperarse.

Se equivocan, también, los que esperan nuestra complicidad en una represión selectiva. La Alianza Democrática repudia la violación de los derechos humanos de cualquier chileno y condena las relegaciones a dirigentes poblacionales y estudiantiles. También protestamos con energía ante el exilio impuesto a dirigentes políticos sin otro cargo que el de expresar sus ideas. En materia de principios no valen las conveniencias políticas. Más aún, el Gobierno a través de la represión fortalece la mística y la movilización de sus adversarios en un juego miope y sospechoso.

Con igual energía reiteramos nuestro repudio al terrorismo y asesinato de fuerzas policiales. A sus autores los hemos llamado simplemente por su nombre: criminales.

Ante esta situación nacional, hemos sido tajantemente claros porque creemos que la obligación de los políticos es evitar lo peor y contribuir a salvar a tiempo la desintegración de un país que ha llegado a ser tan frágil.

El Arzobispo de Santiago ha formulado un llamado a todos los chilenos y al Gobierno le ha pedido el gesto de tomar la iniciativa para la búsqueda de una solución. Muchos sectores, en Santia-

go y en Provincias, han acogido con esperanza este llamado, se han formulado iniciativas constructivas para resolver el conflicto y el Comando Nacional de Trabajadores ha entregado una propuesta patriótica, con nobleza y altura. Pero, hasta ahora, el Gobierno no sólo no ha dado respuesta, sino que ha aumentado la represión.

Por nuestra parte, reafirmamos nuestra íntima convicción de que un pronto regreso a la democracia es el único camino para resolver la crisis de convivencia que estremece el alma nacional.

No creemos en arreglos superficiales o parciales, ni en diálogos con quienes no están dispuestos a negociar seriamente un regreso —ahora— a la democracia. Por ello, declaramos que hoy están vigentes los objetivos políticos formulados en el acuerdo constitutivo de la Alianza Democrática del 22 de Agosto del año pasado, como Bases para un Gran Acuerdo Nacional.

Para ello la Alianza propuso:

- 1) La búsqueda de un acuerdo nacional entre todas las fuerzas políticas y sociales comprometidas con el régimen democrático sobre una Constitución Política del Estado que contemple los puntos de vista de la Alianza. La Asamblea Constituyente es el camino propuesto por la Alianza. No cabe duda que para cumplir este objetivo pueden haber, como lo demuestra la historia constitucional de Chile, varias formas de alcanzarlo. Lo importante es valorar que sin consenso constitucional no habrá estabilidad de la futura democracia. Este es el sentido profundo de nuestra proposición a este respecto.
- 2) La Alianza propuso también, como segundo aspecto central de nuestro planteamiento, que después de 10 años es urgente dar paso a un cambio en la conducción política del Estado. Dijimos que la Nación ha llegado al convencimiento de que es necesario, para el bien de la Patria, que una persona que, colocada por encima de las querellas y dolorosos conflictos de los últimos tiempos, pueda concitar el consenso ciudadano, desarmar los espíritus y encabezar el proceso de transición. Por ello, planteamos que, como en otra crítica circunstancia de nuestra historia, el Jefe del Estado renun-

ciara a su cargo para dar una patriótica solución a la crisis. Si esta proposición no fue considerada una intransigencia por el Padre de la Patria, no vemos por qué el plantearlo deba ser criticado como una propuesta desmesurada. Por lo demás, la propia Constitución del 80 considera y regula esta posibilidad.

- 3) Nuestra tercera posición fue declarar la disponibilidad para respaldar un gobierno provisional representativo de un consenso nacional que en el plazo de 18 meses se oriente a concretar un plan político de retorno a la democracia, junto a una serie de medidas que se reseñaron en el documento oficial de la Alianza.

Estos son los objetivos que hemos entregado al país. Con un sentido patriótico reiteramos que son Bases para el Gran Acuerdo Nacional, lo que implica recibir de las demás fuerzas políticas y sociales sus propias iniciativas e ideas sobre estas materias.

El General Pinochet al reiterar una y otra vez su voluntad de mantenerse en el poder, por lo menos hasta 1989, hace imposible toda solución pacífica al conflicto en lo que hemos calificado de tensión límite. En los últimos días ha vuelto a reafirmar con dureza esta posición. Estamos convencidos que la inmensa mayoría de los chilenos lamentan que el Jefe del Estado se interponga como un obstáculo para encontrar la salida que el país busca.

En esta situación crítica, cada cual debe sumir su responsabilidad. Por nuestra parte, la Alianza Democrática, con el ánimo de avanzar en el gran acuerdo nacional para el retorno a la democracia y de esta manera acoger el llamado del Sr. Arzobispo de Santiago, declara su voluntad de abrir un proceso de acuerdos con fuerzas políticas que aspiren a la democracia, en áreas específicas. De esta manera, se podría llegar a un común planteamiento democrático de la civilidad, abierto al entendimiento necesario e indispensable con las Fuerzas Armadas y de Orden.

En el marco de lo anteriormente señalado, proponemos:

- a) Acordar un itinerario que implique que, dentro del año 1985, debería estar plenamente restablecida la democracia en Chile.

- b) Dentro del plazo de 45 días debería alcanzarse, con la participación de los sectores democráticos que lo deseen, un acuerdo sobre el Estatuto Constitucional que resuelva el conflicto actual de legitimidad por el cual algunos reconocen la validez de la Constitución de 1980 y otros la impugnamos.
- c) Dentro del mismo período podría acordarse el procedimiento para restablecer leyes sobre Partidos Políticos, Ley General de Elecciones, Registro Electoral y Tribunal Calificador de Elecciones.
- d) Dentro de la propuesta común, debería convenirse que los acuerdos y desacuerdos sobre las materias expresadas, sean resueltos mediante plebiscito, bajo normas y condiciones que den plena garantía.

El acuerdo común debería comprender también la exigencia del restablecimiento y respeto de las libertades públicas esenciales: libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión y, en general, libertades civiles y políticas universalmente reconocidas, libre e igual acceso a los medios de comunicación de masas, en particular, a canales de televisión. Debería considerar la participación social y los criterios operativos de emergencia para resolver la crisis.

Supone también poner fin a las relegaciones, terminar con el exilio, impulsar una pronta democratización de las Universidades, restablecer los derechos sindicales y terminar con las amenazas y agresiones a los dirigentes políticos y sociales, como también definir consensualmente la forma de enfrentar el terrorismo de todos los signos.

Para hacer realidad un proceso político como el que resultaría de los acuerdos que se buscan, sería necesario el establecimiento de un gobierno que se comprometa a llevar adelante dicho proceso.

La Alianza Democrática sólo puede buscar acuerdos bajo una condición moral, que va más allá de las personas y que constituye el fundamento que da origen a la Alianza Democrática y a los partidos y movimientos que la integran: la aceptación sin re-

servas del principio de legitimidad democrática que otorga al pueblo el derecho de autogobernarse mediante elecciones libres, limpias e informadas.

Estas propuestas demuestran la voluntad de avanzar hacia la democracia y, de ser acogidas por sectores democráticos que no forman parte de nuestra Alianza, crearían un consenso que naturalmente sería la base de un nuevo arco constitucional del país.

Esta es nuestra proposición que formulamos "con respeto y sin ira". Crear la unidad nacional y la convivencia en justicia y libertad obliga a la generosidad de todos, dejando atrás el pasado para hacer de Chile una sociedad en que reine, lo que un gran filósofo llamó "La Amistad Cívica". A este esfuerzo invitamos a todos los ciudadanos, porque de todos depende la suerte de Chile.

Santiago, 13 de Abril de 1984.-